LA ECONOMIA POLITICA DEL PRESIDENTE REAGAN*

James Tobin**

El programa económico de la administración Reagan, de la misma manera que el programa del gobierno Thatcher en Gran Bretaña, manifiesta una contrarrevolución conservadora en la teoría, la ideología y la práctica de la política económica. El propósito de esta contrarrevolución es reducir la influencia económica del gobierno, en especial del gobierno central, en relación con la de la empresa privada y de los mercados libres. Están en juego cuatro clases de políticas. 1) La estabilización macroeconómica, que concierne al uso de políticas fiscales, monetarias y otras que afectan la producción nacional, el empleo, los precios y otras variables de amplia significación económica. 2) Las relativas a la desigualdad económica, que se refieren a la utilización de recursos fiscales para redistribuir el ingreso y la riqueza. 3) La asignación de recursos, tocante a las prioridades nacionales entre varios bienes públicos y privados. 4) La regulación de las actividades económicas y los mercados. Hablaré principalmente de las dos primera categorías.

REVOLUCION EN LA POLITICA ECONOMICA

He hecho referencia a una contrarrevolución; debo entonces recordar la revolución a la que se opone. En Estados Unidos y en otras democracias capitalistas

* Título original en inglés, "Reaganomics and Economics". Tomado de *The New York Review of Books*. Subtítulos de la redacción.

** Premio Nobel de Economía en 1981.

occidentales, esa revolución tuvo lugar hace unos treinta y cinco o cuarenta y cinco años, justo antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Ocurrieron cambios radicales en la práctica de la política económica, así como en la teoría de la economía política. La memoria viva de la Gran Depresión creó un amplio consenso acerca del deber estatal de asumir la responsabilidad en el mantenimiento de la prosperidad, al igual que en la protección de los ciudadanos individuales contra las inseguridades inevitables de la vida en una economía de mercado. El *New Deal* en los Estados Unidos y los movimientos socialdemócratas europeos fueron los agentes de estos cambios. Ellos aumentaron la inversión gubernamental en escuelas, habitación, transporte y otros servicios públicos; contribuyeron además a aumentar el poder de mercado de los trabajadores, los sindicatos y los agricultores frente a la iniciativa privada. En el curso de las tres décadas de posguerra, estos cambios fueron plenamente aceptados por todas las corrientes principales de los partidos y ampliadas por gobiernos de diferentes tintes políticos. Aunque se han escuchado rumores de descontento en volumen creciente durante los pasados quince años, sólo hasta hace poco los contrarrevolucionarios han ganado poder político.

Me limitaré principalmente a los Estados Unidos y a los dos primeros puntos de discusión en la agenda de la revolución y de la contrarrevolución: la estabilización macroeconómica y la redistribución del ingreso y de la riqueza. Hay dos leyes del Congreso que simbolizan la revolución. La Ley del Empleo de 1946 que asignó al poder federal la obligación de obtener el "máximo de empleo, de producción y de poder de compra". Diez años antes, acatando la Ley de Seguridad Social, el gobierno federal reconoció la obligación de proteger al ciudadano individual frente al infortunio económico personal, es decir, a los desempleados, a la gente de edad carente de pensión y a los huérfanos. El *New Deal* había llevado ya al Gobierno Federal a la cuestión del bienestar y a la protección del trabajo, a asegurar los depósitos bancarios y las hipotecas, y a otras medidas de protección. Hacia 1947, por tanto, el gobierno federal había asumido responsabilidades tanto en el mantenimiento de la prosperidad general como en asegurar contra, e indemnizar por, las peores consecuencias personales de la depresión y del cambio económico.

Estas eran, en realidad, nuevas responsabilidades. Las políticas fiscales y monetarias no estaban, hasta antes de los últimos años de la década de los treinta, orientadas de manera significativa hacia la estabilización económica. En 1929-1934, tanto Hoover como Roosevelt elevaron los impuestos y buscaron en vano

equilibrar el presupuesto federal. Estaban preocupados por los efectos de la depresión sobre el presupuesto, no por el impacto del presupuesto sobre la economía. A lo largo de la precipitada declinación de 1929-1932, la política monetaria asignó a la economía norteamericana sólo una prioridad secundaria, poniendo énfasis primario en la defensa de las reservas de oro de los Estados Unidos y del valor en oro del dólar, hasta que los desastres del invierno de 1932-1933 forzaron a Roosevelt a suspender la convertibilidad en oro del dólar y a devaluarlo. En cuanto a la ayuda para las víctimas de la Depresión, Hoover —un cuáquero que había ganado amplia fama mundial de humanitario mientras dirigía los esfuerzos para aliviar las partes devastadas de Europa al cabo de la Primera Guerra Mundial— la consideró en principio como responsabilidad de la caridad privada y de los gobiernos locales, pero no de los recursos hacendarios federales. Roosevelt, afortunadamente, era pragmático.

Redefiniciones similares de las responsabilidades económicas del gobierno central tuvieron lugar en otras democracias avanzadas durante los años treinta y cuarenta. En Inglaterra, dos informes del tiempo de guerra presentados por Lord Beveridge, uno sobre seguro social y otro sobre pleno empleo, prepararon la escena para la estrategia macroeconómica de posguerra y para la legislación del "Estado del Bienestar".

A estos desarrollos políticos correspondieron fundamentaciones y contrapartidas intelectuales de importancia. En 1936, con la *Teoría general del empleo, del interés y del dinero* de J. M. Keynes, comenzó una revolución en la macroeconomía y en la teoría de la política monetaria y fiscal, la cual se extendió a través del mundo de habla inglesa y, después de la guerra, a la Europa continental y al Japón. Esta revolución proporcionó las razones para los compromisos relativos al pleno empleo de varios países, junto con una guía sobre la manera de lograr tales objetivos. El ciclo económico ya no sería considerado, al modo en que lo hacían los economistas marxistas y ortodoxos, como una característica inevitable y funcional del capitalismo. De acuerdo a la teoría Keynesiana, las fluctuaciones de la actividad económica a lo largo y ancho de la economía son dispendiosas; pero pueden evitarse mediante una intervención fiscal y monetaria activa, las así llamadas políticas de estabilización.

La macroeconomía Keynesiana no conduce lógicamente a ninguna posición a favor o en contra de las medidas del Estado del Bienestar. Pero, otra vez en contraste con la izquierda y la derecha, ella ciertamente no dice que la redistribución del ingreso y de la riqueza por la vía fiscal y de las transferencias sea dañina o

incluso fatal para el capitalismo. Desde el punto de vista personal de Keynes, "las fallas sobresalientes de la sociedad económica en que vivimos consisten en su fracaso para proporcionar el pleno empleo y en una distribución arbitraria e inequitativa de la riqueza y de los ingresos". Keynes confiaba en que ambas imperfecciones podían corregirse sin sacrificar la eficiencia y el carácter progresista del capitalismo de mercado, frente al cual guardaba el mismo respeto que sus antepasados clásicos y sus colegas. Veinte años después, Paul Samuelson, el principal arquitecto de la síntesis de las teorías neoclásicas y Keynesiana que llegó a ser la principal corriente ortodoxa de la economía norteamericana, expresaba este punto de vista optimista muy claramente:

Una comunidad puede tener pleno empleo, al mismo tiempo puede tener la tasa de formación de capital que quiera y puede realizar todo ésto de modo compatible con la redistribución del ingreso que por medios impositivos desee esa comunidad desde el punto de vista ético.

Keynes y Samuelson están diciendo, en otras palabras, que una amalgama de capitalismo y de democracia social es igualmente operable y robusta. En contraste, la extrema izquierda y la extrema derecha sostienen que el capitalismo no puede permitirse o sobrevivir a las políticas igualitarias.

La época de posguerra, especialmente los primeros veinticinco años, parecieron justificar el optimismo de Keynes y Samuelson. En ningún otro período de similar extensión la productividad por trabajador o los niveles de vida tuvieron un crecimiento tan rápido, o la producción agregada y el empleo evanzaron tan firmemente, o el comercio mundial se extendió de manera tan amplia. En comparación con los años cincuenta y sesenta, los últimos diez han sido decepcionantes. Pero no deberíamos perder la perspectiva.

INFLACION Y DESEMPLEO

La principal fuente de sorpresas y desilusión respecto a la revolución fue la *estanflación* de los años setenta: la combinación de elevada inflación y elevado desempleo. Incluso durante la época de su éxito más fácilmente perceptible, las políticas keynesianas en pro del pleno empleo y la estabilización anticíclica hicieron surgir ansiedades crónicas acerca de la inflación. En verdad los defensores mismo de la concepción, desde principios de los años cuarenta, advirtieron que el pleno empleo, al remover la disciplina salarial impuesta por el desempleo y la amenaza del despido, sería incompatible con la estabilidad de precios. Algunos de

ellos previeron la necesidad de restricciones directas sobre los salarios y los precios para reconciliar los dos objetivos. La economía tendría una predisposición "secular" o de largo plazo hacia la inflación, observaron ellos mismos, si los salarios y los precios ascendieran libremente en las industrias en expansión y durante los auges de la economía, pero solo cayeran lentamente en los sectores declinantes y durante las recesiones breves.

De manera adicional, el sesgo inflacionario fue exacerbado por la legislación de bienestar social, ampliada y expandida como fue por las administraciones de posguerra de ambos partidos y por la acción de éstos en el Congreso. El ejemplo más dramático fueron los programas de la Gran Sociedad a finales de los años sesenta. El seguro de desempleo embota en alguna medida el incentivo para buscar y aceptar empleo, en especial los trabajos menos remunerados y menos atractivos.

Tal vez fueron más importantes los cambios que se encuentran dentro de la cuarta de mis clasificaciones iniciales. La coalición política roosveltiana abrió la política de grupos de interés de viejo cuño a grupos grandes que habían sido excluidos de la misma con anterioridad. Como todos los gobiernos, el gobierno federal estadounidense ha atendido siempre de manera *ad-hoc* a los intereses de negocios privados con influencia política, como lo ilustra ampliamente la historia de los aranceles, de las "mejoras internas", de las dotaciones de tierra, de las licencias de operación bancaria y de los subsidios. Comenzando en los años treinta, los sindicatos ganaron protección federal para organizarse y para negociar. Los salarios, los horarios y las condiciones de trabajo llegaron a estar sujetas a normas federales. Los granjeros fueron no solamente subsidiados sino organizados en carteles federalmente administrados. La promoción de poderes monopólicos para los sindicatos y las uniones de granjeros fueron justificadas por J. K. Galbraith y otros como acciones para oponerse o "contrapesar" a los poderes monopólicos de las grandes empresas, para beneficio de la sociedad en su conjunto.

Esta dudosa proposición nunca le fue simpática a los Keynesianos liberales, dedicados principalmente al pleno empleo y a disminuir la desigualdad. En cualquier caso, estas fuerzas de contrapeso aumentaron las tendencias inflacionarias. Los trabajadores, sindicalizados o no, tenían más poder para obtener incrementos salariales durante los auges pero resistían los cortes durante las recesiones. Los precios agrícolas de garantía disminuyeron las tendencias al descenso y las declinaciones cíclicas en los precios de los alimentos y de las materias primas, que habían contribuido tanto a la estabilidad de precios durante y con anterioridad a los años veinte.

Sin embargo, el registro inflacionario de los Estados Unidos fue muy bueno hasta fines de los años sesenta. No fue una sorpresa para ningún economista, keynesiano, monetarista o clásico, que el financiamiento del déficit de la guerra de Vietnam sobrecalentara en ese entonces una economía que ya estaba operando en el límite de su capacidad.

LA EPOCA DE LA CONTRARREVOLUCION

El gran desengaño, para la teoría y la política económica, que creó el escenario para la contrarrevolución fue el aceleramiento inflacionario de los años setenta, el cual se dio a pesar de políticas monetarias que desencadenarían tres recesiones y a pesar de un desempleo mayor que en las dos décadas anteriores. Muchos observadores explicarían la estanflación por la serie de perturbaciones exteriores, de una severidad sin precedentes, que golpearon la economía mundial durante los años setenta: la depreciación del dólar después de que Nixon lo declaró inconvertible en oro en 1971, la escasez mundial de productos básicos y los aumentos especulativos de 1973, los dos grandes impactos de la OPEP, de 1973-1974 y 1979. Otros culpan a las políticas fiscales y monetarias sobre estimulativas de 1972-1973 y 1977-1978. La controversia está lejos de ser resuelta, pero la administración Reagan está segura de su diagnóstico: los desengaños de los años setenta son el resultado inevitable de las políticas erróneas seguidas a lo largo de las décadas de posguerra.

La Reaganomía es, como el Thatcherismo en la Gran Bretaña, la contrarrevolución político-ideológica que se opone a la revolución que ocurrió hace unos treinta y cinco o cuarenta y cinco años. De la misma manera en que la teoría keynesiana inspiró esa revolución, una ola de reacción profesional contra la síntesis de las doctrinas neoclásicas y keynesianas que se había convertido en la ortodoxia de los años sesenta sostiene a la contrarrevolución. En ambos casos, por supuesto, hay muchas divergencias entre la teoría económica, la ideología popular y la política económica real. No obstante, en ambos casos, una ola común de opinión inunda las revistas académicas, los medios de comunicación popular, la retórica política, del Congreso o del Parlamento, y las filosofías que guían al Presidente o al Primer Ministro. Correcta o incorrecta, la revolución es culpada por los desengaños estanflacionarios de los años setenta, las elevadas tasas de desempleo, de inflación y de interés, la depresión en el mercado de valores y las caídas en el crecimiento de la productividad y en la formación de capital. Las viejas doctrinas

y políticas, nuevas hace cuarenta años, son desacreditadas y reemplazadas por nuevas doctrinas y políticas, viejas hace cuarenta años.

La nueva doctrina respecto a la estabilización es que la intervención fiscal y monetaria activa —caracterizada o caricaturizada como “sintonía fina”— es el problema, no la solución. El gobierno debería comprometerse formalmente a abandonar las políticas anticíclicas y dejar que la economía de mercado se establezca a sí misma, como ocurrirá, dada la confianza en que las políticas gubernamentales serán estables. Así, el banco central debería atarse a sí mismo, o ser atado, a la regla de una tasa fija de crecimiento monetario, independientemente del estado de la economía. De la misma manera, la legislación sobre impuestos y gasto público no debería responder a las condiciones reinantes en los negocios. Actualmente, ante el país y ante el Congreso, hay varias propuestas para poner en práctica políticas macroeconómicas ciegas a las fluctuaciones cíclicas, las cuales incluyen enmiendas constitucionales que requieren equilibrar el presupuesto anual y restringir el gasto gubernamental y el crecimiento monetario. Estas proposiciones son vistas con buenos ojos por la administración Reagan.

Uno de los argumentos contra las políticas anticíclicas del pasado es que fomentaron la inflación al quitar a las empresas y a los trabajadores el incentivo para bajar los precios y los salarios —¿por qué no esperar justamente hasta que el gobierno infle de nuevo la demanda? En Gran Bretaña, Margaret Thatcher ha puesto a sus paisanos y paisanas sobre aviso de que la única manera que tienen de restaurar los trabajos y la prosperidad perdidos en la actual depresión es desinflar. El gobierno de su majestad no hará nada para lograrlo.

La misma advertencia ha sido hecha repetidamente en Estados Unidos por Paul Volcker, Presidente de la Reserva Federal (Banco Central), quien, desafortunadamente para la efectividad de sus advertencias, no obtiene el mismo auditorio que un jefe de gobierno. El Presidente Reagan no ha hecho creíble la amenaza de Volcker para aquellos que determinan los precios y los salarios. En vez de eso, la ha socavado al prometer deflación sin lágrimas: un chorro instantáneo de crecimiento rápido, disminución del desempleo y declinación de la inflación. Recientemente, es cierto, su Secretario de Hacienda ha caído en un viejo “error” keynesiano al pedir a la Reserva Federal soltar un poco para prevenir la recesión incipiente. Por otro lado, la administración no está sintonizando suavemente la política fiscal en una dirección antirecesiva. Al contrario, su actual sintonía fina está encaminada en la otra dirección —esta tratando, como Hoover y Roosevelt al principio de los años treinta, de compensar los efectos de la recesión sobre el déficit

presupuestal mediante cortes mayores en el presupuesto. (Sin embargo, declaraciones recientes de David Stockman, director de la Oficina de Presupuesto, muestran conciencia de la futilidad de perseguir déficits presupuestales específicos en una economía debilitada).

NUEVA POSICION DEL GOBIERNO

La renuncia a las políticas de estabilización implica, si es realmente efectuada, que el gobierno ya no tendrá objetivos significativos con relación a las variables económicas *reales*. Por ejemplo, respecto al empleo y al desempleo, a la producción nacional y a su crecimiento. Por supuesto, cualquier administración política hará públicas sus proyecciones, escenarios y esperanzas. Pero estos carecerán de significado si el gobierno rehuye tomar medidas para hacerlos realidad. Los gobiernos Reagan y Thatcher dicen que están proporcionando un marco fiscal y monetario estable dentro del cual la empresa privada y los mercados libres restaurarán la prosperidad y el crecimiento no inflacionario. Otra manera de plantearlo es que, cualquiera que sean los resultados económicos que generen los agentes privados dentro del tal marco, serán por definición óptimos. Esta es la manera en que el actual jefe del Consejo de Asesores Económicos, Murray Weidenbaum, plantea el caso, incluso si su cliente todavía no lo entiende bien de esa manera.

Está claro que este es un giro de 180 grados en el compromiso de la Ley de Empleo de 1946, para no mencionar la Ley de Pleno Empleo y Crecimiento Equilibrado de 1978 (la Ley Humphrey Hawkins). Seguramente, los objetivos de empleo se han estado escurriendo durante largo tiempo. La tasa de desempleo fue de 3 por ciento al fin de mediados de los cincuenta, cuando la Reserva Federal aplicó los frenos mediante el aumento en las tasas de interés, y de 5 por ciento en el siguiente punto cíclico de máximo ascenso. La administración Kennedy-Johnson oficialmente adoptó como meta de pleno empleo un 4 por ciento de desempleo, la logró en 1965, y la excedió en la época de la guerra de Vietnam. Durante los años setenta las metas operacionales de desempleo no fueron hechas explícitas, pero las acciones de política revelaron objetivos implícitos del 5 por ciento, después del 6 por ciento, y es probable que ahora sean del 7 por ciento o más.

El escurrimiento refleja, desde luego, la primacía dada a la frustrante batalla contra la inflación. Pero, una vez que la batalla esté ganada, si ésto fuera posible, dudo que la Reserva Federal y la Administración llegaran a arriesgarse a reencender la inflación aflojando los tornillos monetarios lo suficiente como para permitir

una reducción significativa del desempleo desde el intervalo de 7 a 8 por ciento. Es más probable que acordaran reasumir una tasa de crecimiento real sostenible a las tasas prevalecientes de utilización de capital, y no proporcionarían financiamiento para un crecimiento temporal más alto que permitiera absorber la desocupación creada durante la lucha antinflacionaria. Este escenario está, por cierto, explícito en la proyección de la Hacienda Inglesa.

Hoy en día, en los Estados Unidos, la política y las perspectivas macroeconómicas están dominadas por la política monetaria de la Reserva Federal. La administración Reagan asignó la deflación a la Reserva Federal, regañó a los gobernadores de la misma por errores del pasado y los urgió a ser enérgicos.

La reserva está actuando con energía, y como el Jefe Volcker lo ha señalado repetidamente y con claridad, se propone ser gradual pero resueltamente más enérgico cada año hasta que las tasas de inflación sean insignificanamente distintas de cero. Las políticas de oferta monetaria practicadas por la Reserva Federal, como Volcker y sus colegas lo aprecian mejor que Reagan y sus asociados, no darán lugar a un crecimiento económico real, a menos que la inflación de precios y salarios se disuelva en uno o dos puntos por año. Dado lo recalcitrante de la dinámica de la inflación de costos y salarios, es altamente probable que haya considerables daños y sufrimiento económico durante una transición de varios años.

La administración rechaza por principio todas las políticas directas de precios y salarios, formales o informales; incluso difunde persuasivos llamamientos presidenciales al respecto. En su ausencia, el único mecanismo mediante el cual la desaceleración monetaria produce deflación consiste en crear suficiente angustia económica para que los trabajadores y empleados, en la desesperación por proteger sus trabajos y solvencia, acepten incrementos salariales y de precios menores que los prevalecientes. Podemos ver este proceso en acción al otro lado del Atlántico, donde a la mitad del período de cinco años de la señora Thatcher la cifra de las tasas de desempleo es de dos dígitos, mientras que las tasas de inflación también permanecen en dos dígitos, aunque desciendan lentamente.

El escenario montado por la señora Thatcher no era exactamente lo que la administración Reagan tenía en mente. El recorte de impuestos de tipo "ofertista" fue concebido para desencadenar un resurgimiento de la inversión, de la actividad empresarial y del esfuerzo productivo. Los partidarios del ofertismo estaban impacientes con las ortodoxias conservadoras tradicionales que consideraban que los estímulos fiscales debían esperar a que se produjera el balance presupuestal y la deflación. Explotando la ansiosa competencia de ambos partidos en el Congreso, los

partidarios de este punto de vista tuvieron éxito al promover recortes fiscales que superaron los recortes presupuestales del inconfiable señor Stockman. Pero el decreto impositivo únicamente solidificó la firme resolución del señor Volcker, que está destinado a ganar el estira y afloja fiscal y monetario. Como lo captó el mercado de valores, la situación es una "trampa 22". Las tasas de interés no pueden ser lo suficientemente bajas para sostener la expansión a menos que la economía esté en recesión.

DISTRIBUCION DEL INGRESO

Voy ahora a una segunda dimensión de la contrarrevolución, la distribución del ingreso y la riqueza en cuanto están afectadas por los impuestos federales y las transferencias. La igualdad de oportunidades ha sido un ideal norteamericano y una excusa americana. El ideal del capitalismo en una democracia es una carrera justa desde un arranque parejo. Los grandes premios van a los más rápidos pero todos los participantes son recompensados —y cuanto más recompensados más rápidos corren todos. Ciertamente los resultados económicos y sociales son altamente desiguales. Las disculpas consisten en que todos los corredores tienen las mismas oportunidades y que los diferenciales de precios generan recompensas aún más amplias para todos los participantes. Las oportunidades están lejos de ser iguales. Nosotros los norteamericanos escapamos de las castas feudales del Viejo Mundo, pero erigimos nuestras propias barreras raciales, religiosas y étnicas. Inclusive si éstas son superadas, permanece el hecho duro de que los hijos de padres con alto nivel económico y social alcanzan un punto de partida con ventajas: mejor educación en el hogar y en la escuela, mejor nutrición y cuidado médico, tanto como más regalos y herencia de bienes mundanos. Dar a los niños estas ventajas, desde luego, ha sido tradicionalmente una fuerte motivación para trabajar, ahorrar y emprender.

La riqueza nutre a la riqueza y la pobreza nutre a la pobreza. A pesar de los legendarios ejemplos de movilidad social espectacular, los resultados desiguales de una generación son generalmente las oportunidades desiguales de la siguiente. Aquí, como en otras democracias, los gobiernos han buscado detener la dinámica de la desigualdad recurriendo a la educación pública gratuita, a la seguridad social, a la "guerra contra la pobreza", y a la imposición fiscal progresiva.

La legislación presupuestal y fiscal de 1981 en Estados Unidos es una reversión histórica de dirección y de propósito. Las instituciones, compromisos y "redes

de seguridad" existentes no pueden ser desmanteladas rápidamente, pero el mensaje es suficientemente claro: la desigualdad de oportunidades ya no es algo que concierna al gobierno federal.

El gobierno ha abandonado virtualmente toda pretensión de gravar fiscalmente la transferencia de riqueza entre las generaciones. Las ganancias de capital sobre los activos así transferidas son excusadas del impuesto al ingreso, y ahora las más de ellas estarán libres de impuestos a la propiedad y a los regalos. En la apresurada lucha que ambos partidos libran por el favor de los votantes ricos, el Congreso descuidadamente liberalizó este tipo de impuestos sin importarles la riqueza dinástica irrestricta y la desigualdad de oportunidades.

El ingreso del capital, en contraste con el ingreso por salario, está crecientemente libre de impuestos federales. Todavía antes de la ley de impuestos de 1981, Hacienda calculó que sólo un tercio del ingreso de capital aparecía como ingreso personal gravable¹. Las ganancias de capital fiscalmente afectables sólo ocasionalmente llegan a serlo en realidad; y cuando ello ocurre la tasa más alta de impuesto aplicable ahora sería únicamente del 20 por ciento. El aplazamiento del impuesto sobre el ingreso ahorrado para el retiro, accesible con facilidad a través del empleador o de los planes "hágalo usted mismo", efectivamente libera los rendimientos de tal ahorro del impuesto y en general desplaza el principal a una categoría impositiva más baja. El nuevo certificado "para todos los ahorradores" exento de impuestos no lleva ningún riesgo y supera a la actual tasa de inflación en varios puntos.

De hecho, las políticas fiscales y monetarias de la actual administración son una receta para tasas de interés altas; la ley impositiva reduce la carga fiscal para los causantes más ricos, quienes pueden escapar del impuesto sobre percepción de intereses mientras piden deducciones por el interés pagado en las hipotecas, deudas de consumidores y otros créditos. El rico refinado sabe cómo, o conoce a los abogados que saben como, combinar las deducciones por depreciación e intereses con las tasas preferenciales correspondientes a las ganancias de capital para proteger los salarios y los ingresos de los auto-empleados respecto de los impuestos. Aunque fueron derramadas muchas lágrimas en los esfuerzos exitosos por reducir los impuestos a las categorías de ingresos más altas, de las cuales se decía que desestimulaban el ahorro y la inversión, especialmente la tasa del 70 por ciento ahora abruptamente

¹ Eugene Steuerle, "Is income from capital subject to individual income taxation?" *Office of Tax Analysis Paper 42*, Octubre de 1980.

tamente bajada al 50 por ciento, pocos de los causantes de esas categorías de ingreso pagaban tales impuestos y no los pagarán ahora.

El gobierno es socio de las empresas, y la legislación reciente deteriora la posición de sus acciones hasta el punto en que la participación gubernamental en los costos y riesgos de la inversión supera a su participación en las ganancias esperadas. Este es el resultado de combinar la depreciación crecientemente acelerada ("15-10-5-3"), con el crédito fiscal a la inversión —su valor multiplicado por los convenios de devolución de arriendos— y las deducciones de intereses.

En el extremo inferior del espectro económico, se están abandonando los esfuerzos federales para apoyar los ingresos y las oportunidades. En la medida en que se reducen y se combinan en ayudas en bloque los fondos federales para el bienestar, los cupones para alimentos, la ayuda médica, la ayuda para la capacitación laboral, la ayuda para educación y otros residuos de la guerra a la pobreza, los beneficiarios quedarán a merced de los legisladores y de los causantes locales de los impuestos. Este proceso apenas está comenzando. Cerca de 150 mil millones de dólares en ingresos fiscales de 1984 han sido regalados, y gracias a la indización de las categorías impositivas ninguno será recuperado después de eso a consecuencia de la inflación. El presidente ha hecho ante el Congreso la caravana de presentar su presupuesto balanceado y hace presión ahí para redimir sus promesas de hacer recortes presupuestales incluso mayores que los promulgados a principios del año. Tales recortes no ocurrirán en defensa, intereses de deuda pública, o incluso en el seguro de desempleo. Habrá más recortes en programas sociales, más dosis del "nuevo federalismo" que devuelve estas responsabilidades y la necesidad de financiarlas a los estados y municipalidades.

EFFECTOS Y PERSPECTIVAS

El programa económico de Reagan ha sido publicitado como capaz de remediar la inflación y el desempleo, revivir la productividad, la inversión, el trabajo duro y la parquedad. Probablemente no pueda lograr estos maravillosos resultados. Lo que seguramente va a hacer es redistribuir la riqueza, el poder y la oportunidad a los ricos, a los poderosos y a sus herederos. Si este es el principal resultado, el público llegará a estar considerablemente desencantado.

La administración, a pesar de su ideología de mercado libre, ha hecho poco para dismantelar las regulaciones y subsidios que son costosos, ineficientes e inflacio-

narios. Los programas agrícolas no sólo continúan subsidiando a los productores sino que lo hacen de tal modo que elevan los precios al consumidor. Los causantes, los consumidores y los usuarios pagan por la marina mercante norteamericana, muy costosa y no competitiva. La administración Carter quitó las regulaciones antes aplicables al transporte aéreo, pero las medidas análogas para el transporte de superficie están paradas. La actual administración está en suficiente disposición para liberar o discontinuar regulaciones a las empresas cuando los valores opuestos son la protección al consumidor o la conservación del ambiente. La actual administración no es tan devota de la libertad de mercado, de la competencia y de los intereses de los consumidores como para desafiar a la clientela política de las grandes empresas, de los sindicatos y de los granjeros. Estas vacas políticamente sagradas han estado rondando durante un largo tiempo, y ninguna otra administración reunió la voluntad o el poder para destruirlas. Pero una administración que pretende tener un mandato popular para la contrarrevolución no debería dejar ilesas las más objetables características del viejo orden.

La perspectiva de la economía norteamericana para los años ochenta contiene algunas manchas brillantes y algunas previsiones oscuras. Por el lado brillante, parece improbable que los Estados Unidos y el mundo vayan a ser golpeados otra vez por perturbaciones externas de la magnitud de los correspondientes a los años setenta. Aunque la actual abundancia de petróleo puede no continuar, los norteamericanos están ahora mejor adaptados a los altos precios del combustible y están mucho mejor preparados para enfrentar incrementos futuros. En la medida en que la productividad y la formación de capital fueron refrenadas por los impactos energéticos de los años setenta y la incertidumbre acerca de cómo adaptarse a ellos, ellas deberían repuntar en los años ochenta.

Por el lado oscuro, el remedio puramente monetario para la inflación puede detener la economía durante media década, debido a que la formación de capital estará desestimulada ya sea por las altas tasas reales de interés o por las pésimas expectativas de ganancia, o por ambas. El "nuevo federalismo", como apenas está comenzando a hacerse evidente, tendrá efectos devastadores sobre las finanzas de muchos estados y gobiernos locales, así como sobre los servicios que ellos proporcionan, especialmente a los pobres. Mientras tanto, los recortes fiscales estarán ampliando el golfo entre los niveles de vida de los ricos y los correspondientes a los pobres, sin la compensación prometida de la derrota de la estanflación. Pienso que al final una sociedad política democrática no tolerará de su gobierno y de su banco central una estrategia económica de indiferencia al estado de cosas reales en la economía ■